

ARGENTINA 1980-1990

Por RAÚL MARTÍN BERRIO

El comportamiento de las Fuerzas Armadas argentinas en el proceso de cambio democrático, durante la década de los ochenta, está globalmente determinado por dos vectores distintos, pero que configuran una sola imagen: la del papel jugado por el Ejército argentino en el referido cambio y también determinan la que éste hace experimentar como factor de transformación al instituto armado.

También habrá que tener siempre presente un factor exterior que otorga a las Fuerzas Armadas unos papeles concretos dentro de una estrategia global y zonal, trazada por Estados Unidos, en primer término, y que responde a unos intereses específicos.

Existió otro factor interior, consistente en una evolución profunda de los condicionamientos políticos y de la mentalidad social del pueblo argentino.

Hay que añadir antes de profundizar este análisis, que la posible cooperación de las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio democrático argentino, es una situación apenas planteada en el campo de la teoría, ya que en el de la praxis se estuvo en un enfrentamiento continuo, solapado o evidente, según los momentos vividos, fruto del desconocimiento mutuo habido entre militares y clase política.

Es, así, la Argentina una realidad política en la que difícilmente encontraremos unos componentes claros y operativos referibles a un hipotético entramado institucional que explique el nivel de cooperación de las Fuerzas Armadas

en el cambio democrático, porque esta cooperación, tal y como se dio en otras repúblicas iberoamericanas, aquí no se virtualizó. Esta sería la primera nota diferenciadora con respecto a otros modelos de cambio.

Este análisis histórico, se efectuará con los elementos ya citados globalizándolos en condicionantes exteriores e interiores, para una mayor concreción.

Condiciones exteriores

Vienen dados por su nivel de relación con el Gobierno de los Estados Unidos.

Jugando con el factor tiempo, situémonos desde una perspectiva que nos permita entrar en la década de los años ochenta con una visión que nos permita entender qué pasó, cómo y por qué se dieron los hechos históricos.

Está bien para ello arrancar del golpe militar del año 1976. Estados Unidos y Argentina tienen una vía fácil de comunicación que es la que les proporciona su común aceptación y práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, profundamente enraizada en un sentimiento igualmente común, como es el de la repulsa del comunismo y, consecuencia lógica, la localización y erradicación del enemigo interior como objetivo básico a alcanzar.

Indudablemente esta identidad ideológica mantenía una comunicación fluida y confiada entre los militares de ambos países.

Será el presidente Carter con la imposición de su política, fiel observadora y garante de los derechos humanos, el que al exigirle a todos sus interlocutores promueva un cierto distanciamiento con los militares argentinos; y en esta postura abrimos la década de los ochenta. Había un embargo a la venta de armas y la ayuda militar suspendida por el Congreso estadounidense para con Argentina. Ello implicaba una cierta actitud reprobatoria con respecto a los «modos» de gobierno de la cúpula militar de Buenos Aires. El elemento civil argentino disidente, y operante desde la clandestinidad, bajo la fórmula de la guerrilla urbana, sintió robustecidas sus instancias políticas y las incrementó notablemente. De manera paralela se incrementó también su persecución por parte de los responsables del Gobierno. El desconocimiento y el rencor se instalaron en la vida política argentina.

No provocó realmente un movimiento de péndulo, pero sí que sirvió para replantear algunas posturas a la llegada al poder en el año 1981 del republicano Reagan. Las armas siguieron embargadas para Argentina, pero

se permitió una cierta ayuda militar previo compromiso por parte de Buenos Aires de practicar una política respetuosa con los derechos humanos, frase un tanto ambigua en sí misma, llena de parcialidad, y que en definitiva consistía en aflojar de alguna manera el nivel de la entonces llamada represión, concepto que siempre aparece unido como contrario a los derechos humanos.

Reagan tenía un serio problema de seguridad inmediata en Centroamérica, donde una serie de fuerzas paramilitares de ideología comunista, alimentadas y sostenidas desde La Habana, se infiltraban y operaban en aquel espacio físico poniendo en peligro la continuidad de una serie de gobiernos que mantenían unos planteamientos afines con Estados Unidos. Su intervencionismo militar directo no será posible por lo que se hizo necesaria la localización y utilización inmediata de un gobierno que sirviera de peón de confianza. Y este Gobierno es el militar de Buenos Aires. Muchos de sus oficiales y jefes han pasado por la Academia militar de las Américas, de Panamá, y tienen una formación ideológica afín.

Reagan y su Administración ven con buenos ojos esta posibilidad de operar con las Fuerzas Armadas argentinas en Centroamérica. Sus soldados y mandos poseen una vasta experiencia en la lucha contra la guerrilla. E igualmente considera importante el desarrollo práctico de situar el Ejército argentino al frente de la no nacida OTAS, cuya función primordial consistiría en establecer un control estratégico del Atlántico Sur, a favor en última instancia de los Estados Unidos.

El año 1981 y parte del año 1982 son años de entendimiento y colaboración. El Ejército y un sector de la población argentinos confían en Estados Unidos, en su apoyo, directo e indirecto, y ven fortalecidas sus posturas de Gobierno. Por el contrario, la oposición política reacciona globalizando y radicalizando sus posturas, enconando su lucha.

Para unos, lo que están haciendo está bien hecho, y por ello el Gobierno adalid de la democracia los respalda, y para otros, justamente por ello hay que incrementar la lucha por el poder para liberar al pueblo argentino de los reaccionarios y aniquiladores de las libertades más esenciales del ser humano. Estos papeles se otorgan en exclusiva al Ejército y sus hombres. El divorcio está ya sobre el tapete, y de aquí en adelante se planteará cada vez con más crudeza y nitidez.

El mes de abril del año 1982 es el del inicio del conflicto y posterior campaña de las Malvinas. La ocupación incruenta del Archipiélago supuso para los argentinos el final de un largo contencioso con Gran Bretaña. El estado de

ilusión y euforia fueron generales. Fue una situación de ilusión vivida en común que los unificó momentáneamente. El general Galtieri alcanzó por el momento la consideración de héroe.

Todo fue bien hasta que Gran Bretaña pasó a la ofensiva en aras de una recuperación de las islas Malvinas. La Flota inglesa obtuvo el beneplácito y el apoyo logístico de Estados Unidos, que en cuestión de horas pasaron de una neutralidad tácita y tolerante a una participación y un intervencionismo indirecto a favor de su madre patria. La Argentina sin valedor, con evidentes fallos en su logística y estrategia militar vio con dolor cómo las Islas recién recuperadas regresaban al dominio de su anterior ocupante: Inglaterra.

Se evidenció claramente que había existido una muy mala definición de la campaña y que la ejecución de las órdenes emanadas de las distintas comandancias fue extremadamente ineficaz y carente de coordinación; y que Estados Unidos contaba con la Argentina para controlar el Atlántico Sur, siempre y cuando Inglaterra conservase en su poder las Malvinas, llave operativa y clave estratégica para el acceso al estrecho de Magallanes y a la Antártida.

La reacción de la sociedad argentina fue visceral y radicalizada. El «héroe» cayó de su pedestal y fue procesado junto con sus más inmediatos colaboradores militares y civiles. Y con ellos se procesó a todo un sistema y una gestión de gobierno.

Se habló de traición, con referencia a Estados Unidos; un nacionalismo un tanto olvidado recobró vigor y lanzó soflamas antiimperialistas. Y fue dentro del estamento militar donde este sentimiento se hizo más patente y manifiesto. Aún hoy en día perdura, aunque un tanto suavizado.

La respuesta de Estados Unidos fue la de relanzar sobre el gobierno militar la acusación de violación de los derechos humanos, y su gestión por lo tanto recusable, adoptando una postura de lejanía y neutralidad aparentes, en espera de la subida al poder de un gobierno civil que posibilitase un nuevo movimiento de aproximación sin que ellos les acarrearase una mala imagen política. Querían relacionarse con el Ejército argentino en el marco de una Administración democrática constituida por personas elegidas por sufragio censitario. Y esperaron al margen a que el horizonte político evolucionase.

El Ejército argentino en el interior y en el exterior alcanzó cotas de desprestigio enormes; y él a su vez como institución se encerró en sí mismo, aislándose en un bloqueo, desde donde en una actitud defensiva frente a la sociedad civil esperaba su momento, realizando salidas esporádicas que

evidenciaron su rechazo al nuevo modelo político, que desde su punto de vista estaba destruyendo a la nación.

Con la llegada de Raúl Alfonsín a la Presidencia, los Estados Unidos intentan una aproximación. Reagan declara solemnemente su decisión de levantar el embargo de armas; hacían falta urgentemente repuestos y también renovar el armamento perdido en la campaña malvinense; y de permitir la asistencia militar a la Argentina.

Alfonsín respondió a todo ello con el anuncio de una nueva política militar, que esencialmente iba a consistir en:

- Reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, eliminar progresivamente su autonomía hasta acabar situándolas en un papel de subordinación total con respecto al poder civil y constitucional; llevar a cabo una profunda reforma de la profesión militar, variando para ello su formación castrense, al modificar los planes de estudio en las academias militares; el Código de Justicia Militar también sería reformado; así como también llevaría a cabo los anunciados y prometidos juicios civiles de los ex comandantes; promovió la ley de «Punto Final»; y se procedió a elaborar y debatir una ley para la defensa. En conjunto todas estas actuaciones tenían un claro significado: la subordinación del Ejército al poder constituido. Y en torno a ello, dos corrientes de opinión contrarias, la que representaba a los militares, mantenedora de un prestigio y de una limpieza en sus ejecutorias anteriores en defensa de la nación; y por otra parte aquella que se hacía eco de un sector de civiles que reclamaba un castigo ejemplar para aquellos militares que hubiesen delinquido en las mismas ejecutorias anteriores.
- Relacionarse con un gobierno que tenga sobre la mesa semejante conjunto de tensiones es difícil y problemático y así lo estimó el de Estados Unidos. Finalmente adoptó una postura de prudente equilibrio. Quiso guardar su anterior entendimiento con el Ejército argentino, pero siempre que estos contactos quedaran supeditados al visto bueno de las autoridades civiles democráticamente elegidas. En el fondo este giro con respecto al pasado colocaba a Estados Unidos en una situación igualmente privilegiada con respecto a la capacidad decisoria de la Administración de Buenos Aires, anhelante del respaldo político y de los créditos de los estadounidenses.

Pero los militares argentinos, cerrados en sí mismos, ya no deseaban como antes el apoyo norteamericano. Durante unos años únicamente se registrarán tibios intentos de aproximación que en ningún caso fueron lejos. Siempre su iniciativa partía del Pentágono.

En el año 1984 se llevaron a cabo algunas visitas protocolares de carácter, en busca de una posible aproximación.

Quizá el punto álgido sea la reiterada invitación norteamericana para que el Ejército argentino se incorporase en calidad de participante al conjunto de ejércitos tácticos que el programa de UNITAS desarrollaba y la también reiterada excusa, que en definitiva era una firme negativa a ello, por parte argentina.

Por otra parte, la Armada argentina dio comienzo en el año 1985 a una serie de maniobras conjuntas con la del Brasil. Argentina, o los marinos argentinos, al menos, dejaban claro su definición por la asunción de alianzas regionales, de carácter prioritario sobre las anteriores de ámbito hemisférico propugnadas por Estados Unidos.

Se fue más lejos; en declaraciones a la prensa algunos argentinos manifestaron que el aceptar las repetidas invitaciones para participar en la UNITAS suponía una evidente subordinación sin contrapartida favorable, ya que el posible beneficio profesional que se derivase de ello era prácticamente nulo.

No obstante, los militares norteamericanos mantuvieron permanentemente su oferta de aproximación.

En el mes de octubre del año 1985 hace una visita política a la Argentina el general norteamericano John Galvin, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Llega hasta el Estado Mayor Conjunto argentino, con cuyo jefe, brigadier Teodoro Waldner, se reúne en presencia de representantes de todas las Armas. Allí, ante todos, diserta sobre el modo en que el Ejército norteamericano se relaciona ante su propia Administración, a la que se subordina. E incide en esto especialmente, al mismo tiempo que expone en qué términos se virtualiza esta dependencia. No se había roto el hielo, pero le habían escuchado.

En el mes de noviembre del mismo año, y como consecuencia casi inevitable, se dio un tímido y simbólico paso. Ocho oficiales del Aire argentinos acudieron a los Estados Unidos especialmente invitados para que visitaran las principales Academias de pilotos de guerra. Fueron bien recibidos y tuvieron ocasión de entrar en contacto con los más importantes avances que la técnica y la Ingeniería aeronáutica norteamericana habían alcanzado, al mismo tiempo que se les pidió que refiriesen ante los pilotos anfitriones sus experiencias personales de combate adquiridas en la campaña de las Malvinas, en la que habían dado muestras de una elevadísima preparación profesional, y de un valor y decisión estimables.

Paralelamente la Administración civil argentina era instada por Estados Unidos para que procediese a activar la deseada aproximación militar. Pero el Ejército argentino estaba muy lejos, no poseía la mentalidad necesaria, como para acceder a los requerimientos que el Ejecutivo de su país le cursaba regularmente en este sentido. En consecuencia, los Estados Unidos urgieron para que la Cámara Legislativa argentina elaborase una ley para la reforma militar, de tal manera que la república consiguiera un ejército dúctil y conforme con los criterios políticos existentes.

Al año siguiente la Armada argentina hizo dos declaraciones importantes: que estaba dispuesta a estrechar lazos con Estados Unidos y que no participaría en el UNITAS, pero que ya que se encontraban en el Atlántico Sur algunas unidades navales de otras Marinas veían bien la ocasión para realizar algunos ejercicios de entrenamiento con ellas. Ahora bien siempre queda la duda de que no se quiso ir más lejos o de que realmente no se pudo hacer más, dado el fortísimo déficit económico nacional existente. Otro elemento a considerar sería el de la conveniencia política de ello. La Administración argentina pudo tener un cierto temor al coste político que podría suponer el situar a algunos militares argentinos en plenitud de funciones profesionales, como son los de un operativo importante, cuando muchos de ellos eran considerados por amplios sectores civiles, como incursores en actividades criminales.

Durante este año, fue ya evidente que un sector de las Fuerzas Armadas argentinas rechazaba tajantemente cualquier aproximación, mientras que otros la toleraban. Así sucedió con motivo de la visita del general John Balantyne: sus entrevistas con el ministro de Defensa argentino suscitaban reacciones negativas; hubo declaraciones evidentes en este sentido, como la que salió del CEMIDA, en la que se mantenía que el objetivo fundamental de Estados Unidos en relación con las Fuerzas Armadas latinoamericanas es subordinarlas a sus propios intereses y, para ello, deben ser educadas en la metodología represiva.

A pesar de todo las visitas importantes continuaron. En el año 1987 es el general John Galvin el que llega nuevamente. Ahora habla como militar y plantea dos cuestiones: Estados Unidos suministraría a la Argentina material militar a cambio de la plena participación de ésta en el UNITAS.

La oferta era inestimable para un Ejército que tenía que reparar y reponer, actualizándolo, el material de guerra perdido en las Malvinas. Pero llegaba tarde, la casi exclusiva dependencia en cuestiones de armamento con la industria estadounidense había sido reemplazada por otra diversificada que buscaba evitar esa exclusividad y dependencia. La Argentina desde el año 1983 compraba armamento a Israel, Italia, Francia, República Federal de

Alemania, Corea del Sur y a España; y este nivel de negocio se ha mantenido hasta la actualidad. Únicamente en el año 1986, mostraron interés por conseguir repuestos en general del material norteamericano, viejo y averiado, que obraba en su poder. En el año 1987 hubo contactos con Estados Unidos para estudiar si convenía reemplazar sus aviones *Skyhawk* y *Mirage* por *Phantoms*. Esta fue una actitud circunstancial. Lo que realmente se pretendía era una autonomía en materia de armamento. Esta es la idea política del Gobierno argentino.

Por ello en el año 1986 se establece un acuerdo de cooperación técnica e industrial entre organismos argentinos y brasileños competentes, para la fabricación de aviones propios militares o civiles. Y esta es la muestra que a largo plazo mantiene la Argentina: la consecución de una autonomía militar, aparte de otros matices, del Cono Sur con respecto a Estados Unidos.

Fundamentalmente estos posicionamientos son bien vistos por los militares argentinos, mantenedores de una hipersensibilidad en todo lo relacionado con Estados Unidos. Estos a su vez con referencia a las Fuerzas Armadas mantienen una doble actitud: continuas invitaciones para la aproximación, pero también una permanente vigilancia tendente a evitar un posible protagonismo castrense en la vida política argentina. Y es por ello por lo que enfáticamente aquellos que mantenían la teoría de la seguridad nacional, ahora son acérrimos defensores del régimen democrático argentino y de la conveniencia de una vida política constitucional, como únicos medios o caminos conducentes a un futuro firme y a un crecimiento económico.

Por ello, cuando las Fuerzas Armadas argentinas, sectorialmente consideradas, reactivan sus tensiones con el Ejecutivo, éste ve fortalecida su postura política con generosas renegociaciones de su deuda exterior. El efecto inmediato es un mayor endurecimiento de las posiciones. Los radicales del Ejército se encastillan más y de rechazo algunos sectores sociales aumentan su nivel de crítica para con ellos.

Los caminos de la subordinación de lo militar a lo civil son difíciles y en muchas ocasiones ni existen, algunos existen, pero inevitablemente pasa por Washington, que lógicamente moderará el hipotético tráfico.

Condiciones interiores

En la Argentina, desde la época del general San Martín hasta casi hoy, las Fuerzas Armadas han tenido un claro y evidente protagonismo, y en ciertas etapas casi exclusivo, en la formación y desarrollo de la nación. Los militares

tienen por cierto que ellos han generado, con su esfuerzo personal y profesional, el país. Y que las metas más relevantes alcanzadas en cuanto a progreso social se deben a su único esfuerzo. E incorporaron a estas tareas creadas unos mecanismos de vigilancia y seguimiento altamente imbuidos por sus conceptos castrenses de orden y disciplina. Se sienten garantes de la confianza tácita que la mayoría silenciosa de la nación ha depositado en ellos, para que con su celo atento y vigilante procuren un desarrollo armónico y eficaz, de cuestiones tales como el orden público, el quehacer gubernamental, los procesos económicos como fuente vitalizadora de la vida social, o cuando un programa político no bien llevado puede provocar una seria involución social.

Y desde luego consideran firmemente que cuando sobreviene un conflicto su deber primero es el de asumir directamente las más altas responsabilidades de gobierno, ya que son ellos los capacitados para el ejercicio de las Fuerzas Armadas por su preparación profesional. Esta puede ser su grandeza y su tragedia, según por quién y desde dónde se evalúe su comportamiento. Los militares argentinos se ven siempre como tales, sea cual sea su campo de actuación. Pero los civiles y más en la actualidad, ven ese peculiar desdoblamiento como una intrusión en el escenario del juego político, reservado al poder civil. Y por vulnerar este principio se les persigue y critica. Algunos sectores civiles van más lejos aún, a la vista de la guerra de las Malvinas, donde hubo un fracaso evidente del Ejército argentino: niegan su preparación profesional primaria. Se les niega el pan y la sal.

Apenas caben unos criterios públicos establecidos en busca de una comprensión de esta situación de desprestigio castrense; en realidad son opiniones personales que establecen corresponsabilidades, enjuiciando actitudes de civiles. Así, Horacio Verbistky en su trabajo, *Civiles y militares*, dice: «Se puede afirmar que todos los horrores en la guerra sucia no hubieran sido posibles si no hubiera existido un partido radical cuyo líder, Ricardo Balbín, llamo 'guerrilla industrial' a los reclamos sindicales de la zona de Villa Constitución en el año 1975; si no hubiera existido un partido radical que por boca de Juan Carlos Pugliese justificó y defendió el accionar del general Menéndez en Córdoba; si no hubiera existido un partido radical que a través de Raúl Alfonsín propuso en el año 1977 una reforma constitucional para compartir el poder con los militares con presidente militar y primer ministro civil, una salida que el mismo Alfonsín se encargó de definir como 'a la portuguesa'».

Estos hombres tampoco hubieran sido posibles sin un partido peronista que, a pesar de poner el grueso de las víctimas de la guerra sucia, recién en el

año 1979 ante la visita de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos, emitió su primera declaración de condena, firmada por Deolindo Felipe Bittel y Herminio Iglesias. Ni hubiera sido posible si un partido socialista y uno comunista, cuyos dirigentes Simón Lázara, Fernando Ladra y Athos Fava, viajaron por el mundo explicando la diferencia entre los militares patrióticos y democráticos argentinos y la dictadura fascista de Pinochet.

No hubieran sido posibles, además, sin el apoyo decidido de los sectores empresariales que contribuyeron a la caída del Gobierno de Isabel Perón. Y, finalmente, y en términos más estrictamente políticos, la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y el indulto de Menem son claras pruebas de condescendencia de la clase política con las atrocidades cometidas por los gobiernos militares.

Las Fuerzas Armadas como institución armada están atravesando una doble crisis: una interna, desarrollada en un doble sentido, a niveles de persona, y como colectivo, en cuanto a objetivos profesionales; y otra externa que afecta a su relación con el cuerpo social argentino, no ven con claridad cómo sería su integración en él. Hay una serie de circunstancias que gravitan constantemente sobre ellos, impidiendo hallar la luz suficiente para clarificar el ámbito decisorio, tales como: fracaso militar y político después de siete años de gobierno; discusión sin éxito en cuanto a conclusiones sobre las causas del fracaso; la derrota armada demostró que sus planes de enseñanza no eran suficientes o adecuados, que falló estrepitosamente, si es que existió, la planificación de la campaña y, que no hubo una logística adecuada, y también que la instrucción de la tropa era prácticamente inexistente; y por último la expulsión de la institución de sus jefes más destacados, con lo que ello suponía de indignidad profesional.

Pero tampoco los civiles han tenido claro el diseño del nuevo militar, integrado en la sociedad como un elemento más. Y ello ha provocado reacciones virulentas, al tratar de conferirles actitudes poco acordes con su mentalidad.

El presidente Alfonsín se expresó así en el año 1987, en su mensaje al Congreso, con referencia a la Defensa nacional:

«Se busca afianzar el funcionamiento armónico de las tres fuerzas, jerarquizando el Estado Mayor Conjunto, con el fin de expresar claramente los objetivos que el poder político se haya propuesto alcanzar en materia de Defensa nacional».

O cuando en el año 1988 con respecto a la misión de las Fuerzas Armadas y también en su mensaje dirigido al Congreso, dijo:

«La defensa a ultranza» de la Constitución debe ser para el militar la defensa de su propia dignidad.

Y también manifestó, tras el ataque al Regimiento de la Tablada, en el año 1989:

«Se formará el Congreso de Seguridad Nacional, que asesorará al presidente sobre la estrategia para el accionar antisubversivo».

El único párrafo que asigna a los militares argentinos una misión concreta es el último y viene a ser una parcial claudicación del ejecutivo con respecto a los dos anteriores en los que la definición que se les aplica intencionadamente es un tanto difusa. Da la sensación de que el presidente Alfonsín sabía muy bien qué es lo que no debían de hacer las Fuerzas Armadas, pero indudablemente desconocía qué era lo que en definitiva sí tenían que hacer. En esencia la Fuerzas Armadas no deberían tener carácter político.

Hasta el año 1989 y con referencia a las Fuerzas Armadas, la Argentina permaneció en una situación de inconcreción absoluta, para salir de ella, hacía falta primero establecer una comunicación fluida entre militares y civiles, y a la inversa, que posibilitase el entendimiento.

El Gobierno del presidente Alfonsín poseía dos objetivos preciosos: uno, acabar con la autonomía de las Fuerzas Armadas y su disgregación interna; otro, terminar con los levantamientos, no por la fuerza, sino por vía de la profesionalización de sus miembros en una tarea conjunta que hiciese innecesaria la «asonada» como fórmula reivindicativa.

Pero estos objetivos nunca dispusieron de unos programas que los desarrollasen. Los primeros cuando fueron enunciados insuflaron una cierta ilusión entre los militares, la carencia reiterada de los segundos produjeron el efecto contrario. Los mandos medios sufrieron con más intensidad esta sensación. El generalato les había llevado a la derrota, y los civiles, los arrinconaban. Simultáneamente veían cómo la partida presupuestaria para las Fuerzas Armadas en pocos años había pasado de un 5 a un 0,5. Y también sentían que sus salarios no cubrían sus necesidades mínimas.

Muchos de ellos tuvieron que hacer un segundo trabajo para poder subsistir.

Aquella comunicación fluida, a la que nos referíamos anteriormente, deseable y necesaria, a partir de este año, empezó a pensarse que debería ser lo más extensa posible, y que se podría conseguir mediante el

entendimiento de las burocracias, las cuales tendrían que abrirse a todos los niveles en busca del entendimiento.

Los civiles tienen que ser conscientes de dos circunstancias: las Fuerzas Armadas son necesarias para el cuerpo social. Sin ellas estaría mutilado; tienen que poseer y desarrollar un papel concurrente con la defensa.

En este sentido recojamos las declaraciones efectuadas por el presidente Menem.

En el año 1989, para la prensa y en relación con lo que se esperaba de las Fuerzas Armadas.

«Las Fuerzas Armadas están convocadas a esta gran tarea de reconstruir el país, sin distingos, todos al servicio del país».

También en el año 1989, con relación a su concepto de Defensa nacional, declara:

«La existencia del Ejército sirve para preservar la paz mediante la disuasión».

Y cuando en el año 1990 explica la misión interna de los militares:

«Las Fuerzas Armadas pueden actuar en conflictos internos, siempre que el presidente así lo requiera».

En su conjunto tienen un carácter aclaratorio, y si bien están dirigidas a toda la nación, es obvio que son claramente aprovechables para que a partir de ellas la sociedad civil entienda qué se espera de los militares.

Lo urgente fue desde entonces reformar la educación de los militares, y formar la educación de los civiles en el sentido de poder practicar una comunicación y un entendimiento positivo. Por ejemplo en materia de Defensa nacional pocos civiles estaban capacitados para entablar un desarrollo programático conjuntamente con los militares.

El civil de nueva mentalidad tenía que admitir desde el concepto de la Defensa nacional el intervencionismo militar en la administración de la paz y la promoción de los intereses nacionales. Igualmente deben entender que los militares por medio de su intervención no van a constituir una amenaza continua sobre ellos, al tener la posibilidad de utilizar su fuerza como instrumento de sus fines, sino simplemente que los militares deben coordinar sus esfuerzos con los de los diplomáticos en la búsqueda de un objetivo común. También deben admitir que la defensa tiene honda relación con la economía y por ello los economistas no deben rechazar a los militares como si fuesen intrusos en su campo profesional. Precisan preparar su

formación en el sentido de establecer puentes que faciliten la relación y el beneficio consiguiente para el país de unos conocimientos profesionales que tienen mucho en común.

Algunos militares y escasos civiles pasaron a las universidades argentinas para desde ellas explicar a los futuros profesionales en qué consistía la Defensa nacional y cómo en ella confluían los intereses de civiles y militares. Se deseaba formar en sus cursos civiles expertos en estrategia y defensa. Hoy en día hay graduados que acreditan conocimientos sobre: problemas estratégicos contemporáneos, económicos de defensa, políticas de defensa en términos comparativos, la dinámica de la compleja industria militar y la relación entre defensa y política exterior.

Este es el camino y el vehículo que hay en la Argentina. Se estima como adecuado para integrar activamente a las Fuerzas Armadas argentinas en el gran objetivo de la reconstrucción nacional. Victoria Gamba-Stonehouse describe en *Misiones y estrategia* el ejemplo argentino, como evidencia positiva un ejemplo específico, referido a un esfuerzo común de civiles y militares en busca del entendimiento, literalmente se expresa en estos términos: «...es la creación de un proyecto político implementado por el Estado Mayor Conjunto de la Argentina en un curso estratégico tanto para civiles como para militares. La idea fue juntar en un mismo local a dos oficiales de cada uno de los servicios y a personal civil del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa, así como a académicos de las universidades.

Después de un año de curso sobre defensa y estrategia, estos individuos habían aprendido cómo comunicarse y manejar un lenguaje común, lo que aunado a actividades conjuntas diarias, los ayudó a entender también cuáles eran sus respectivos sistemas de valores. Cada uno tenía que aprender cuáles eran los niveles de educación y exigencias diferentes de las Fuerzas Armadas por un lado, diplomáticos por otro, los burócratas por otro, y los académicos por otra parte. Los académicos podían empezar a enseñar la disciplina de los estudios estratégicos allí aprendida, a nivel universitario, multiplicando el estudio educativo a otros niveles del país. El resultado del primer año del proyecto fue excelente, pero las dificultades recaían en la falta de institucionalización de este tipo de esfuerzo y en la falta de entendimiento de la importancia de este tipo de educación por parte de la opinión pública del país».

Esta compenetración y conjunción de intereses entre militares y civiles resulta vital para el asentamiento y desarrollo de la democracia en la Argentina; ambos sectores deben llevar a cabo esfuerzos permanentes en este sentido, pero es la sociedad civil la que tiene que evidenciar su

capacidad para desarrollar una estructura suficiente, y que facilite el equilibrio nacional. Hay que construir una unidad nacional que albergue a todos sin excepción, aún los que se caracterizaron por su militarismo exclusivista, con la única excepción de los que legitimaron la represión interna; el pueblo debe ser educado para que su comportamiento público no suscite nuevas crisis, ni alimente tensiones en los esquemas institucionales; aceptar la condición de expertos profesionales del Estado a favor de las Fuerzas Armadas; alejamiento de los militares de las áreas de gobierno y seguridad; recuperar la consideración social de los militares; y todo ello en el encuadre de una nueva cultura cívico-política.